

Sandra Borda Guzmán
Diciembre de 2025

La ofensiva estadounidense en el Caribe:

*gestación e implicaciones
para la región y el sistema internacional*

Pie de imprenta

© 2025 FES (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Editor

Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (Fescol)

Calle 71 n° 11-90, Bogotá

<https://colombia.fes.de/>

Responsables de la publicación:

Oliver Üllenberg, representante de la Fundación Friedrich-Ebert en Colombia

Coordinadora del proyecto

Catalina Niño Guarnizo

Contacto:

catalina.nino@fes.de

Diagramación

vargasramirezangela@gmail.com

Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente las de la Fundación Friedrich-Ebert (FES).

No se permite el uso comercial de los materiales editados y publicados por la Fundación Friedrich-Ebert (FES) sin autorización previa por escrito de la FES.

Las publicaciones de la Fundación Friedrich-Ebert no deben utilizarse con fines electorales.

Sandra Borda Guzmán
Diciembre de 2025

La ofensiva estadounidense en el Caribe:

*gestación e implicaciones
para la región y el sistema internacional*

Contenido

1. Introducción	5
2. Antecedentes recientes de la gestación de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe	6
3. El entorno global de esta crisis	8
4. El impacto para Colombia	10
Referencias	12

1.

Introducción

La segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (enero de 2025) marcó el inicio de una política hacia América Latina, y hacia Colombia y Venezuela en particular, muy distinta a la que tuvo lugar durante su primera administración. La aproximación ha sido una mucho más agresiva y sostenida en el tiempo, y su diseño inició prácticamente desde la primera semana del nuevo gobierno. Se trata de una política con un componente ideológico fuerte (que no puede ser calificado como mera fachada), en la que el cambio de régimen en Venezuela cobra una relevancia inédita en la historia reciente de la política exterior estadounidense; la política cuenta con dosis más bien bajas de pragmatismo; y, finalmente, existe un marcado acento en la producción y el tráfico de drogas ilícitas, entendido como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y que, consecuentemente, requiere de atención inmediata y un músculo militar de considerables proporciones.

Pero adicionalmente, la política antidrogas actual tiene un componente que pasa por un proyecto de política interna de la administración Trump que es tanto o más importante que el proyecto internacional: la *securitización, militarización y terrorización* de la guerra contra las drogas es también una herramienta que le permite a ese gobierno reducir la capacidad de los otros poderes públicos (particularmente la del Congreso) frente a la decisión del Ejecutivo de usar la fuerza en escenarios regionales o internacionales. Este proyecto de ampliación del poder presidencial no es exclusivo ni de la política internacional ni de la política alrededor del uso de la fuerza: en otros ámbitos, el gobierno estadounidense también ha buscado una ampliación del poder y la discrecionalidad de la figura presidencial y, de esta forma, alterar el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos propio del diseño institucional estadounidense.

El incremento de las tensiones en el Caribe, finalmente, ha producido una intensificación de conflictos latentes a nivel regional y global. Esta presencia militar estadounidense en aguas internacionales no solo ha contribuido a enturbiar las ya difíciles relaciones de la administración Trump con la región latinoamericana, sino que ha provocado además la reacción de Rusia y China en una escalada que amenaza con convertir la hostilidad de Washington hacia el régimen de Caracas en un punto central de la ya densa cadena de conflictos internacionales que involucran a los países más poderosos del sistema internacional. Al momento de escribir este documento, parece evidente que cualquier decisión de Washington y Moscú frente a la invasión de Rusia a Ucrania, necesaria y simultáneamente va a involucrar una negociación y una discusión sobre Venezuela. Cualquier concesión o movimiento agresivo de las dos potencias debe entenderse en clave de dos juegos en dos tableros distintos pero profundamente interconectados. Aunque menos evidente, China también puede estar buscando crear un vínculo con sus demandas sobre Taiwán. La *desgobernanza* global y el desorden internacional es, inevitablemente, un escenario de oportunidad para que las potencias puedan poner en marcha intentos de mejoramiento de su posición global usando estos espacios de conflicto y tensión. Se trata entonces del mantenimiento de equilibrios frágiles que conllevan riesgos importantes de inestabilidad.

Estas tres ideas se desarrollarán a lo largo de este documento en tres secciones: la primera describirá la secuencia de decisiones en Washington que llevaron al escenario actual de enfrentamiento y abierta hostilidad militar contra el régimen de Nicolás Maduro (2013-); la segunda analizará la relación con otros conflictos y el involucramiento de potencias extrarregionales; y la tercera hará énfasis en las implicaciones para Colombia y para la región latinoamericana.

2.

Antecedentes recientes de la gestación de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Antes de reconstruir la secuencia de decisiones en Washington que llevaron a la gestación de la presencia militar más visible que ha tenido Estados Unidos en el Caribe desde la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989, es preciso señalar varias particularidades de la aproximación del nuevo gobierno a América Latina, y al problema de las drogas ilícitas y la lucha contra las organizaciones criminales. Para empezar y a pesar de que América Latina dista de ser un asunto crucial en la agenda, la presencia de Marco Rubio en el gabinete, como secretario de Estado y luego como consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en simultánea, ha hecho que se preste mucha más atención a la región de la que se le ha prestado en el pasado reciente. De hecho, Rubio hace poco completó su cuarta gira por la región en un lapso de ocho meses.

A pesar de que la política exterior estadounidense frente a América Latina estuvo dividida desde el comienzo de la administración entre un grupo de “halcones” liderados por el mismo Rubio, y otro de “palomas” mucho más pragmáticos y amigos de la negociación con Venezuela (liderados por Richard Grenell y Mauricio Claver-Carone), este equilibrio se alteró a favor de Rubio gracias a la salida de Claver-Carone del gobierno en mayo de este año. A pesar de que Grenell continúa en el gobierno, Rubio ha logrado vincular su posición en favor del despliegue en el Caribe con el apoyo de los republicanos de la Florida a la Big Beautiful Bill¹ y de esta forma ganarle la partida al ala moderada. Aunque las tensiones y el trabajo descoordinado entre Grenell y Rubio han sido reportados en varias ocasiones y es probable que continúen (véase: <https://www.nytimes.com/2025/07/08/world/americas/trump-venezuelan-migrants-us-prisoner-swap.html>), Rubio ha logrado consolidar su posición en la administración y hoy, claramente, cuenta con más poder y más cercanía al presidente gracias a su interinidad como consejero de Seguridad Nacional. La única forma de contrapeso al secretario Rubio son los congresistas demócratas acompañados por un grupo pequeño de republicanos encabezados por Rand Paul, que tradicionalmente se han opuesto al sobreexpansionismo militar y que han intentado, sin éxito, contrarrestar el movimiento masivo de recursos militares hacia el Caribe (Mineiro, 2025).

Pero más allá de las divisiones internas, lo cierto es que la propuesta de endurecer la posición estadounidense en el

asunto de las drogas ilícitas y frente a América Latina empezó a gestarse desde muy temprano y al inicio del gobierno. En enero, Trump firmó una orden ejecutiva pidiéndole al Departamento de Estado que bautizara a los carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, en la medida en que constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la amenaza que significa el crimen organizado transnacional (The White House, 2025). La orden ejecutiva dice además que estos carteles, ahora designados organizaciones terroristas externas, “infiltran gobiernos extranjeros en el hemisferio occidental” y menciona explícitamente al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

Mientras el ala dura se movía preparando el escenario legal, solo días después y antes de terminarse el mes de enero, seis prisioneros estadounidenses fueron liberados después de la visita de Richard Grenell a Caracas. En esa misma reunión, Maduro se comprometió a recibir a los migrantes deportados que Estados Unidos enviara de regreso a Venezuela, trato que continúa vigente hasta el día de hoy (Lapadula, 2025). A pesar de este éxito temprano en las negociaciones, la balanza en el interior de la administración se alteró fundamentalmente en mayo cuando Claver-Carone se fue de la Casa Blanca. Según algunas versiones, su salida se explica en parte por la molestia que generó en el Departamento de Estado su protagonismo en la negociación que llevó a la superación de la primera crisis entre los gobiernos de Bogotá y Washington. Dicha crisis fue el resultado de la negativa del presidente Gustavo Petro (2022-) a recibir deportados estadounidenses que llegasen encadenados al país.

También para mayo, la intersección entre la política exterior hacia Venezuela y la política interna estadounidense empezó a intensificarse y el secretario Rubio vio en este escenario una oportunidad inmejorable para empujar al gobierno entero en dirección de una posición más dura y agresiva frente al régimen venezolano. El 20 de mayo el gobierno introdujo en la Cámara de Representantes el denominado Big Beautiful Bill, el proyecto de ley más importante de la joven administración Trump que contenía las políticas de impuestos y de gastos fundamentales para lo que seguía del gobierno. Richard Grenell había prometido una extensión de la licencia de Chevron para exportar pe-

¹ El “Big Beautiful Bill” o “One, Big, Beautiful Bill Act” es un estatuto federal de Estados Unidos promulgado en julio de 2025 que establece políticas fiscales y de gasto, incluyendo recortes de impuestos y extensiones de políticas anteriores. Incluye también aumentos en el gasto para el ejército y la aplicación de la ley de inmigración, junto con recortes de gasto para programas sociales y de subsidios.

tróleo desde Venezuela, lo que provocó que los representantes republicanos de la Florida le enviaran el mensaje al gobierno de que no apoyarían la aprobación del proyecto de ley si no se cancelaba la licencia. Rubio apoyó la propuesta de los congresistas y finalmente la licencia fue cancelada y el proyecto de ley terminó siendo aprobado (Caputo, 2025). Esta victoria sobre Grenell le dio más espacio político a Rubio y le permitió promover una política más recia contra el régimen venezolano.

Sin embargo, alrededor de un mes después, el gobierno le entregó una licencia restringida a Chevron para operar en Venezuela. Superado el *impasse* que generó el paso del proyecto de ley por el Congreso, Grenell se salió con la suya (Delgado, 2025). Grenell argüa que, de no otorgarse la licencia, ello solo le abriría espacio a China para obtener petróleo de Venezuela y le restaría espacio geopolítico a Estados Unidos en su propia zona de influencia. La reacción de los republicanos de la Florida no se hizo esperar y con el objeto de mermar las duras críticas que llovieron sobre la administración Trump por esta decisión, el gobierno tomó la decisión de incluir al llamado cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas extranjeros y Trump señaló abiertamente a Maduro y a otros altos oficiales del régimen de ser las cabecillas de esa organización.

A partir de este momento, la línea del gobierno Trump frente a Venezuela solo siguió una tendencia al endurecimiento. Agosto inicia con el anuncio del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de que la recompensa por la captura de Nicolás Maduro se duplicaría a 50 millones de dólares. Por esta misma fecha, *The New York Times* reveló una directiva secreta destinada al Pentágono en la que se autorizó el uso de fuerza militar contra ciertas organizaciones latinoamericanas dedicadas al narcotráfico y se les denomina terroristas (Cooper, Haberman, Savage y Schitt, 2025). Esta decisión creó un efecto simbólico en la medida en que priorizó y le otorgó más urgencia al problema de las organizaciones criminales latinoamericanas, y un efecto de carácter práctico en la medida en que autorizó el uso de fuerza militar (los militares han participado compartiendo inteligencia antes pero no capturando o ejecutando directamente personas o grupos involucrados en el tráfico de drogas) en el combate directo contra las drogas ilícitas y las organizaciones que las trafican.

Para mediados de agosto, los efectos materiales de esta nueva estrategia se hicieron visibles: el gobierno estadounidense desplegó 4.500 efectivos/soldados en el Caribe, de los cuales 2.200 son infantes de marina (*the boots-on-the-*

beach branch of the military), y tres destructores lanzamisiles: el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale. Desde entonces y hasta el momento en que este texto se escribe, el tamaño del despliegue estadounidense ha ido en aumento. Por ejemplo, una semana después se intensificó el despliegue con el envío de un crucero de misiles guiados, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y tres barcos anfibios (estos equipos estaban programados para llegar la primera semana de septiembre al Caribe Sur). Más recientemente, el portaaviones más grande de la Marina de los Estados Unidos, el Gerald R. Ford, llegó al Caribe el 16 de noviembre con su grupo de ataque, uniéndose a al menos otros siete buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35.

Esta fuerza militar asentada en el Caribe, al momento que se escribe este texto, ha ejecutado extrajudicialmente a ochenta y tres personas (solo tres han sobrevivido) en ataques a veintidós embarcaciones. La administración Trump ha señalado que estos ataques están destinados a erradicar el flujo de drogas ilícitas a Estados Unidos. El gobierno arguye que el país se encuentra en un escenario de conflicto armado en contra de los carteles de la droga desde su primer ataque, el 2 de septiembre del año en curso, y ha denominado a aquellos que ha ejecutado “combatientes ilegales”. Justo gracias a esa definición, ha argüido el gobierno, tiene la posibilidad de adelantar estos ataques letales sin ningún tipo de autorización judicial (Bertrand y Cohen, 2025). En reacción, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha planeado una votación que prohíba al gobierno adelantar maniobras militares hostiles hacia Venezuela y sin la autorización explícita del Congreso, pero no ha tenido éxito en su empeño. Las operaciones en contra de los botes en el Caribe sumadas al anuncio de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, han activado al Congreso en su intento por restringir el ímpetu belicista del gobierno, sin resultados contundentes por ahora.

Finalmente y en el episodio más reciente, desde el penúltimo fin de semana de noviembre se suspendieron vuelos comerciales hacia Caracas y por parte de más de cinco aerolíneas internacionales. Esta suspensión fue el resultado de una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA: Federal Aviation Administration) que advertía de la existencia de una “situación potencialmente peligrosa” y señalaba los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela (Bermúdez, 2025).

3.

El entorno global de esta crisis

A pesar de que la reacción global frente a los ataques contra embarcaciones en el Caribe fue lenta, en el ámbito regional los gobiernos de Brasil y Colombia intentaron reaccionar a lo que consideran es una maniobra militar ilegal por parte de Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro ha insistido en la ilegalidad de las operaciones en el Caribe y ha advertido en contra de producir cualquier cambio de régimen en Venezuela mediante el uso de la fuerza, y el presidente Lula da Silva (2023-) ha hecho declaraciones en la misma dirección, aunque más morigeradas. El resto de la región ha guardado silencio frente a lo que sucede en el Caribe.

La reacción del resto del mundo ha sido mucho más lenta y mesurada. En la Cumbre UE-Celac que tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, el 9 y 10 de noviembre, a pesar del llamado de Lula a no ignorar el asunto, Europa prefirió no pronunciarse y no incluir explícitamente el punto en la declaración final. Pero en la segunda semana de noviembre el Reino Unido anunció que no compartiría más información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas, debido a su preocupación por la legalidad de los ataques que se han venido adelantando. En la reunión de cancilleres del G-7 en Canadá el 11 y 12 de noviembre de 2025, el canciller francés declaró que los ataques están produciendo inestabilidad en la región y violan el derecho internacional (Haltiwanger e Iyengar, 2025). El alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, también declaró estas operaciones y el costo humano que producen como “inaceptables”, las denominó “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones al derecho internacional y llamó a una investigación alrededor de estos ataques (PBS News, 2025).

En este contexto, el fin de semana del 22 y 23 de noviembre dejó planteado un escenario global que devela cómo lo que ocurra con Venezuela y la política de Washington hacia ese país está directamente vinculado con los intereses de las otras potencias, particularmente China y Rusia; se trata de una crisis regional cuyo desenvolvimiento ahora marcha paralelo y está relacionado en formas complejas con el trayecto que siga el conflicto en Ucrania. Para empezar, ese fin de semana tuvo lugar el diálogo entre Europa, Estados Unidos y Ucrania en Ginebra, en el que Estados Unidos presentó un plan de paz para terminar el conflicto y puso el *deadline* del 27 de noviembre para que Europa y Ucrania decidan apoyar su plan de 28 puntos.

Como se mencionó, la presencia militar estadounidense se reforzó durante la segunda semana de noviembre con la llegada el 16 de ese mes del portaaviones Ford a aguas del Caribe. Pero, para el viernes 21 de noviembre, Trump anunció públicamente la posibilidad de iniciar conversaciones con Nicolás Maduro. Sin embargo, al día siguiente, la Federal Aviation Administration emitió la alerta para que vuelos comerciales evitaran sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Solamente esta secuencia de decisiones revela una aproximación de *zanahoria y garrote* hacia Maduro, pero también puede significar un nivel de indecisión importante frente al uso de la fuerza por parte del gobierno Trump.

Simultáneamente, y a propósito del cumpleaños de Nicolás Maduro, el presidente Vladimir Putin (2012-) ratificó públicamente su compromiso con la relación estratégica con Caracas y aseguró que Venezuela “superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en tiempos turbulentos”. Es preciso recordar aquí que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor el 12 de noviembre y allí se estrechan vínculos en materia energética, minera, de transporte y de seguridad (Infobae, 2025). Adicionalmente, el mandatario chino Xi Jinping (2013-) rechazó las injerencias de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto, manifestó que continuará apoyando a Venezuela en su empeño de salvaguardar su soberanía y seguridad nacional, dignidad de la nación y estabilidad social, y añadió que “China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios” (EFE, 2025).

Como si todo esto no fuera suficiente, el lunes 24 de noviembre empezó a tener efecto la designación del cartel de los Soles (cartel que el gobierno Trump ha dicho es controlado por Maduro) como una organización terrorista externa, lo cual abrirá la puerta para nuevas formas de presión de Estados Unidos hacia Maduro: puede endurecer el embargo hacia Venezuela, y el mismo Trump ha sugerido que permitiría a Estados Unidos atacar bienes e infraestructura pertenecientes al mandatario venezolano, entre otras posibilidades. Por esos mismos días, varios medios han anunciado el lanzamiento de una nueva fase de operaciones en Venezuela. Algunas fuentes militares han sugerido la posibilidad de operaciones encubiertas y destinadas a derrocar al gobierno venezolano (Stewart y Ali, 2025). Para la primera semana de diciembre, Trump anunció un bloqueo completo del espacio aéreo

venezolano y un par de días después advirtió, en una rueda de prensa de la Casa Blanca y rodeado por su gabinete, que cualquier país que produzca y trafique drogas a Estados Unidos, hablando particularmente de Venezuela e incluyendo a Colombia, estaría sujeto a ataques militares por parte de su gobierno. Sin embargo, la posibilidad de acción militar adicional ha estado flotando en el aire durante prácticamente todo el mes de noviembre y además de sobrevuelos militares cercanos a la costa, ningún otro movimiento parece haber tenido lugar.

Toda esta serie de eventos revela dos cuestiones que deben ser parte del análisis sobre la política de Washington hacia Venezuela. La primera de ellas es que, y esto es evidente a estas alturas, en la Casa Blanca *no* hay una decisión tomada sobre el uso de la fuerza y la intención de producir un cambio de régimen en Venezuela. Si bien y como lo demostró el recuento hecho en este documento, en ocasiones la posición militarista liderada por el secretario

Rubio pareciera llevar las de ganar, es claro que en otros niveles de la administración hay resistencia y que la perspectiva de una solución negociada no ha sido descartada por Trump (es preciso recordar, por ejemplo, que el acuerdo sobre deportaciones sigue vigente y funcionando).

La segunda cuestión es que cualquier movimiento en dirección del lado “duro” o el lado “pragmático” de la balanza, va a estar íntimamente vinculada con los resultados que Washington logre obtener en el proceso de negociación para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Si Trump está jugando a dos bandas, es muy probable que Putin también lo esté haciendo. Venezuela es un aliado de Rusia en el corazón de la esfera de influencia estadounidense y el incremento de la presión militar para derrocar a Maduro puede estarse constituyendo en una herramienta de negociación que Washington use para extraer concesiones de Rusia frente a Ucrania.

4

El impacto para Colombia

La política exterior colombiana hacia Venezuela se ha caracterizado por un alto nivel de ambigüedad que se ha ido resolviendo parcialmente en favor de una relación funcional con el régimen de Maduro, y que tiende a convertirse en cercanía especialmente una vez iniciada la administración de Donald Trump. Es más, es posible argüir que entre más tensa se torna la relación entre Petro y Trump, más se mueve el gobierno colombiano en dirección del régimen de Maduro, lo que, al final, no resulta ni sorprendente ni contraintuitivo.

Después de la crisis creada en enero de este año gracias a la decisión del presidente Petro de devolver el avión con deportados procedente de Estados Unidos, la relación con Washington ha transitado de una crisis a otra y no se ha podido normalizar. Petro ha sido incluido en la lista OFAC (por su sigla en inglés: Office of Foreign Assets Control), no tiene visa para ingresar a Estados Unidos y, en general, los vínculos bilaterales están en su punto más bajo.

Paralelamente y después del fraudulento proceso electoral en Venezuela, el gobierno colombiano insiste en que no ha reconocido la actual administración de Maduro, pero el presidente colombiano ya se ha reunido formalmente con varios funcionarios venezolanos de alto nivel. Además, en julio ambos países firmaron la creación de una zona binacional que consiste en un acuerdo de cooperación para impulsar la integración económica y social en regiones fronterizas, con énfasis en el comercio, el turismo, la cultura y la seguridad. Así que, *de facto*, el gobierno colombiano ya le ha otorgado reconocimiento formal al gobierno de Maduro.

El presidente Petro ha sido el mandatario más vocal en la región a la hora de denunciar las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, y en varias ocasiones ha intentado que dicha denuncia se haga a nivel regional, pero no lo ha conseguido. Adicionalmente, también ha afirmado que el cartel de los Soles no existe y ha condenado permanentemente los intentos intervencionistas estadounidenses. Desde su punto de vista, la motivación de Washington pasa por su interés en el petróleo venezolano y en su política no hay un interés genuino por el retorno de la democracia. Infortunadamente y a pesar de tener la presidencia *pro tempore* de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Petro no ha podido gestar ningún tipo de reacción colectiva regional frente a las amenazas de Washington del uso de la fuerza. La región atraviesa por un momento de fragmentación política e ideológica pro-

funda que no facilita este tipo de acción. Pero además, la administración Petro no ha tenido una política exterior planeada y eficaz de acercamiento a América Latina y el Caribe que soporte una iniciativa de esa naturaleza. Finalmente, la propuesta de Petro ha sido cuestionada por países que prefieren una aproximación menos vocal y más institucional, menos agresiva y más diplomática, frente a los desafíos que plantea la nueva administración estadounidense. En los otros países de la región no hay mucho interés en comprar el modelo del insulto a través de redes sociales y propiciar la profundización del deterioro de las relaciones binacionales.

En un escenario de esta naturaleza, el desenvolvimiento de la crisis venezolana tendrá un impacto sobre Colombia, por lo menos en lo que queda de la administración Petro y seguramente también después. Por ahora, hay tres posibilidades: una *intervención militar* estadounidense para producir un cambio de régimen –es más probable que se trate de un ataque quirúrgico a bienes e infraestructura de Maduro y sus aliados militares más cercanos, y menos probable que se trate de una invasión terrestre–; un *proceso de negociación* que resulte en buena parte de la disuasión estadounidense, es decir, de la presión militar o la amenaza con el uso de la fuerza; y la tercera posibilidad es que Estados Unidos continúe los ataques a otras embarcaciones en el Caribe por algún tiempo y luego decida que con ello que ha cumplido su misión y regrese por el mismo camino que llegó sin producir ningún cambio en Venezuela.

Para el gobierno de Gustavo Petro, sin duda, la última alternativa es la mejor. Ya ha desarrollado un *modus vivendi* con el régimen de Caracas, régimen que además hace parte de sus hasta ahora fallidos intentos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por tanto, una prolongación del *statu quo* le permitiría mantener la ambigüedad estratégica que ha seguido hasta ahora en su política hacia Venezuela.

La intervención militar estadounidense o, por lo menos, la intensificación de la amenaza con el uso de la fuerza es un escenario que le plantea dilemas muy difíciles de resolver al gobierno colombiano. Maduro, en caso de un uso explícito de la fuerza, tendría incentivos para generar inestabilidad regional y, en ese plan, Colombia es una pieza fundamental. La influencia que tiene el gobierno venezolano sobre el ELN podría desempeñar un papel clave en el intento de Maduro de expandir su crisis, y ello inevitablemente involucraría a Colombia en un conflicto

que puede ser complejo e irresoluble a corto plazo. Este es posiblemente el peor escenario para el gobierno en Bogotá.

Una transición política hacia la democracia puede tener un efecto mucho más controlado y manejable para Colombia. Es muy posible que después de un gobierno de transición, la convocatoria a elecciones resulte en la llegada al poder de la oposición venezolana y esto significaría la pérdida de un aliado importante para Petro, particularmente en el escenario de su tensión constante con el gobierno Trump. Sin embargo, las posibilidades de que esto suceda antes de agosto de 2026 (cuando terminará la administración Petro) son mínimas. Una transición coadyuvada por la operación de Estados Unidos en el Caribe sería indudablemente un éxito diplomático para Trump en la región y dejaría debilitado diplomáticamente a Petro y en un grado de aislamiento continental aún mayor. Es posible que un escenario de esta naturaleza incluso tenga implicaciones en las elecciones presidenciales de mayo del próximo año en Colombia.

Finalmente y como se mencionó, Colombia adelantará elecciones presidenciales en 2026 y por primera vez en mucho tiempo los asuntos de política exterior tendrán un papel central en el debate electoral. Venezuela ya es parte de la agenda de política interna colombiana y las fuerzas políticas, con diferentes niveles de contundencia, están alineadas al lado y lado de la frontera: la derecha colombiana apoya sin matices la posición de la oposición venezolana (incluso cuando su propuesta ha sido la de propiciar una intervención militar estadounidense para derrocar el régimen de Maduro), y la izquierda ha sido –en unos casos más y en otros menos– ambigua a la hora de apoyar al chavismo y a Maduro. Ahora, la relación con Estados Unidos también hará parte de la política interior colombiana. El consenso alrededor de cómo adelantar esa relación se ha roto en virtud de la llegada de la izquierda al poder y en virtud de la aproximación inusualmente agresiva de Trump al país y la región. La política exterior hoy es un elemento más de la polarización política nacional.

Referencias

Bermúdez, Á. 2025, 23 de noviembre. “Al menos media decena de aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos a Venezuela tras alerta de la FAA sobre “incremento de la actividad militar” en ese país”. *BBC Mundo*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/c4g6qqy9jl9o>

Bertrand, N. y Z. Cohen. 2025, 17 de octubre. “Exclusive: Classified Justice Department opinion authorizes strikes on secret list of cartels, sources say”. *CNN*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://edition.cnn.com/2025/10/06/politics/classified-justice-department-memo-cartel-strikes>

Caputo, M. 2025. “How Trump saved his big bill by killing a Venezuela oil deal”. *Axios*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.axios.com/2025/05/23/trump-rubio-venezuela-oil-deal-big-bill>

Cooper, H., M. Haberman, C. Savage y E. Schitt. 2025, 8 de agosto. “Trump Directs Military to Target Foreign Drug Cartels”. *The New York Times*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2025/08/08/us/trump-military-drug-cartels.html>

Delgado, A. M. 2025, 24 de julio. “Trump quietly renews Chevron’s license in Venezuela, marking shift in U.S. Policy”. *Miami Herald*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article311289025.html>

EFE. 2025, 22 de noviembre. “China y Rusia respaldan a Maduro en carta de cumpleaños y prometen defender a Venezuela ante ‘injerencias externas’ en plena tensión con EE. UU.” *El Tiempo*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/china-y-rusia-respaldan-a-maduro-en-carta-de-cumpleanos-y-prometen-defender-a-venezuela-ante-injerencias-externas-en-plena-tension-con-ee-uu-3510976>

Haltiwanger, J. y R. Iyengar. 2025, 13 de noviembre. “U.S. Allies Turn Against Trump’s Drug Boat War”. *Foreign Policy*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://foreignpolicy.com/2025/11/13/allies-trump-drug-boat-war-venezuela/>

Infobae. 2025, 22 de noviembre. “Los regímenes de Rusia y China expresaron su respaldo al dictador Maduro en medio de las tensiones con EEUU”. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2025/11/22/los-regimenes-de-rusia-y-china-expresaron-su-respaldo-al-dictador-maduro-en-medio-de-las-tensiones-con-eeuu/>

Lapadula, I. 2025, 5 de febrero. “Venezuela frees six US prisoners and agrees to receive migrants after Trump envoy meets with Maduro”. *Latin America Reports*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://latinamericareports.com/venezuela-frees-six-us-prisoners-and-agrees-to-receive-migrants-after-trump-envoy-meets-with-maduro/10562/>

Mineiro, M. 2025, 17 de octubre. “Senators Move to Force Vote to Bar Ground Strikes in Venezuela”. *The New York Times*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2025/10/17/us/politics/congress-venezuela-military-strikes.html>

PBS News. 2025, 31 de octubre. “UN human rights chief: U.S. strikes on alleged drug boats ‘unacceptable’”. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.pbs.org/newshour/world/un-human-rights-chief-u-s-strikes-on-alleged-drug-boats-unacceptable>

Stewart, Phil e I. Ali. 2025, 23 de noviembre. “Exclusive: US to launch new phase of Venezuela operations, sources say”. *Reuters*. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/americas/us-launch-new-phase-venezuela-operations-sources-say-2025-11/>

The White House. 2025, 20 de enero. “Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists”. Consultado por última vez el 4 de diciembre de 2025. Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/>

Acerca de la autora

Sandra Borda Guzmán. Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia).

La ofensiva estadounidense en el Caribe:

gestación e implicaciones para la región y el sistema internacional

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el inicio de una nueva política hacia América Latina, y hacia Colombia y Venezuela en particular, mucho más agresiva y sostenida en el tiempo. Se trata de una política con un componente ideológico fuerte en la que el cambio de régimen en Venezuela cobra una relevancia inédita en la historia reciente de la política exterior estadounidense; la política cuenta con dosis más bien bajas de pragmatismo; y hay un acento en la producción y el tráfico de drogas ilícitas, entendido como una amenaza a la seguridad nacional.

La política antidrogas actual tiene asimismo un componente que pasa por un proyecto de política interna de la administración Trump tanto o más importante que el proyecto internacional: la securitización, militarización y terrorización de la guerra contra las drogas es una herramienta que le permite a ese gobierno reducir la capacidad de los otros poderes públicos (particularmente la del Congreso) frente a la decisión del Ejecutivo de usar la fuerza en escenarios regionales o internacionales.

El incremento de las tensiones en el Caribe, finalmente, ha producido una intensificación de conflictos latentes regional y globalmente. Esta presencia militar estadounidense en aguas internacionales ha provocado la reacción de Rusia y China en una escalada que amenaza con convertir la hostilidad de Washington hacia Caracas en un punto central de la cadena de conflictos internacionales que involucran a los países más poderosos del sistema internacional.

Este documento describe la secuencia de decisiones en Washington que llevaron al escenario actual de enfrentamiento y abierta hostilidad militar contra el régimen de Nicolás Maduro; analiza la relación con otros conflictos y el involucramiento de potencias extrarregionales; y hace énfasis en las implicaciones para Colombia y para la región latinoamericana.

Encontrará más publicaciones de la Friedrich-Ebert-Stiftung en el siguiente enlace:

➤ www.fes.de